

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1.810.004.085-5, RIT 1.887-2018, condenó a Yasna de Lourdes Zúñiga Barroso, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena, ello, por su responsabilidad como autora del delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, en grado de ejecución de consumado, cometido el día 15 de enero de 2016, en la comuna de Santiago.

La defensa de la imputada dedujo recurso de nulidad contra la indicada sentencia, el que se conoció en la audiencia pública de seis de septiembre del presente año, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada al efecto.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad se cimenta de forma principal en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en los artículos 5º, inciso 2º; 6 y 7; 19, N° 7; y, 83 todos de la Constitución Política del Estado; artículos 1 y 4 de la Ley 19.640, esto con relación a lo preceptuado en los artículos 11, N° 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 17 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; y, artículo 85 del Código Procesal Penal.

Denuncia que hubo una infracción a la garantía al debido proceso, toda vez que, finalizado el juicio oral y con posterioridad al momento de dictarse el veredicto, en el momento en que los demás intervinientes habían abandonado la reunión en la plataforma Zoom, el magistrado mientras conversaba con el funcionario de sala



señaló: *“Yo me acuerdo de esta causa, esta señora tiene 20 mil causas, esta señora es loca, es como celópata y antes había otra causa más en la cual esta señora...”*, conversación que quedó plasmada en el registro de audio, que incorporó al comienzo de la audiencia.

Expone que lo anterior dejó en evidencia que, en el pronunciamiento de dicho veredicto, se infringió sustancialmente la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19, N° 3 de la Carta Fundamental; en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afectándose concretamente, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial.

Argumenta que, se evidenció en los dichos del magistrado una opinión preconcebida respecto a los hechos juzgados, sumados al empleo de adjetivos calificativos de “loca” y “celópata” respecto a la imputada, lo que quedó refrendado al momento de dictarse sentencia definitiva condenatoria, en la cual se le restó todo mérito probatorio a lo depuesto tanto por la propia imputada, como por la testigo aportada por la defensa como prueba de descargo, resultando imposible soslayar que, al momento de dictar veredicto, el sesgo denunciado impidió al sentenciador abstraerse del juicio de valor, afectando su deber de imparcialidad, al mismo tiempo que el tribunal no se desplegó con neutralidad y objetividad, lo que lo condujo a abandonar su posición equidistante de las partes y desinteresada sobre el objeto de la causa, por lo que pide invalidar el juicio oral y la respectiva sentencia condenatoria a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda

Segundo: Que, de forma subsidiaria, la defensa fundó el arbitrio en el motivo absoluto de nulidad establecido en el artículo 374, letra e), en relación con



el artículo 342, letra c), y ambos en relación con lo dispuesto en el artículo 297, todos del Código Procesal Penal.

Expone que el tribunal no se hizo cargo de toda la prueba rendida en el juicio oral. Efectivamente, y tal como lo mandata el artículo 297, inciso segundo del código adjetivo, en la sentencia el Juez de Garantía no valoró la prueba testimonial de descargo, ni tampoco la declaración de la requerida. La teoría del caso de la defensa versó en la inexistencia de la agresión, en los términos indicados en el requerimiento fiscal, observándose de la prueba rendida en estrado, tanto de cargo como de descargo, es que existieron evidentes discrepancias, ya que la imputada negó la existencia de una agresión. Agrega que la sentencia no se hizo cargo de una contradicción evidenciada en cuanto a la hora en que, supuestamente, se verificaron los hechos. Agrega que, si se analiza la totalidad de la sentencia respecto a la cual se recurre, no existe ni una sola referencia a por qué el tribunal de garantía descarta la versión que señala la imputada. Evidentemente se requería un pronunciamiento del tribunal de garantía en tal sentido, máxime si se trata de versiones contrapuestas entre imputado y víctima respecto de la cual no existen testigos presenciales de los hechos que puedan corroborar una u otra versión. La sentencia prescinde del estándar mínimo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración de la prueba y, en concordancia con lo anterior, existe una carencia de lógica en la fundamentación de la sentencia, el cual se provoca por la omisión que realiza el tribunal de consignar en la sentencia aspectos relevantes de las declaraciones que realizan los testigos en el juicio oral, omisiones que llevan a que el tribunal deje de valorar aquellos aspectos que son relevantes para la teoría del caso de la defensa y que fueron incorporados por estos testigos en el juicio oral simplificado, todo en abierta infracción al artículo 342, letra c) del Código Procesal Penal, todo lo cual condujo al tribunal a dar por



establecido el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, en circunstancias que de haber respetado las normas generales y obligatorias sobre fundamentación de la sentencia y valoración de la prueba, hubiese concluido que no se podría haber acreditado más allá de toda duda razonable que mi representada ejecutó la conducta típica del delito por el cual fue condenado, por lo que solicita invalidar el juicio oral y la respectiva sentencia condenatoria, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda

Tercero: Que, la sentencia impugnada, en su motivo noveno, tuvo por acreditado que, *“el día 15 de Enero de 2016, a las 22:00 horas aproximadamente, en el domicilio particular ubicado en Avenida Presidente Bulnes N°351, departamento N° 810, comuna de Santiago, la requerida Yasna De Lourdes Zuñiga Barroso, agredió a su cónyuge y padre de su hijo, la víctima Cristian Alberto Serey Rossel, con golpes en diferentes partes de cuerpo, causándole lesiones de carácter leve consistentes en excoriaciones de aproximadamente 2 centímetros en región ciliar lateral izquierda, excoriaciones lineales y puntiformes en brazo izquierdo y tórax de 5 centímetros aproximadamente compatibles con rasguños, según el dato de atención de urgencias”*.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado en los artículos 494, N° 5 y 399 del Código Penal en relación al artículo 5° de la Ley 20.066, que se encuentra en grado de consumado.

Ahora, en relación a los puntos abordados en las causales del recurso de nulidad, el fallo señaló en su motivo noveno que, *“las conclusiones fácticas referidas en el motivo anterior, encuentran sustento básicamente en la declaración de la víctima cuyo relato impresiona verosímil por su claridad, precisión y*



concordancia en especial al describir el tipo de agresión recibida por parte de la imputada y las lesiones ocasionadas en relación de causalidad de las mismas, circunstancia corroborada con el dato de atención de urgencia emitido por el Hospital Dr. Alejandro del Río N° 011046188UU001, de fecha de llegada 15 de Enero del 2016, suscrito por la médico de turno doña María Eugenio Barreto Guzmán, Rut 17.534.336-9, antecedentes que concuerdan con el tipo, forma, cantidad y características de las lesiones producidas a la persona de la víctima, a lo cual se suma las descripción de las mismas que efectúan los testigos Cristian y Sebastián ambos de apellidos Serey Gaggero, circunstancia que refuerza la verosimilitud del relato de la víctima.

Medios probatorios que analizados conforme a las reglas de las máximas de la experiencia y la sana crítica permiten establecer el hecho punible y la participación culpable que le ha correspondido en estos hechos a la requerida de autos, toda vez que los hechos habrían acaecido al interior del domicilio que compartía con la víctima siendo la dinámica de los mismos y las agresiones producidas a esta, corroboradas en su relato primero con la observación de los testigos Cristian y Sebastián ambos de apellidos Serey Gaggero y los datos de atención de urgencia contenidos en el informe suscrito por la doctora María Eugenio Barreto Guzmán del Hospital Dr. Alejandro del Río, sin que existan antecedentes que le resten verosimilitud al relato del afectado quien en todo momento individualiza a la requerida como la persona que le habría agredido, sin advertir ganancias secundarias en sus dichos.

En relación a los dichos de la testigo de la defensa, el Tribunal no los considerará todas vez que refiere no haber tomado conocimiento de los mismos, ni en forma presencial, ni por dichos de la imputada”.



Por su parte, y en relación a lo sostenido en audiencia por la defensa, en la motivación duodécima se consignó que, *“la defensa centró sus alegaciones en la falta de prueba, puesto que a su juicio ella estaría constituida únicamente por la declaración de la víctima.*

Cabe tener presente, primeramente, para evaluar la prueba que se rinde en juicio y si se logra la convicción de condena, lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, esto es, que se hubiera acreditado más allá de toda duda razonable, tanto el hecho punible como la participación culpable penada por la ley del requerido, debiendo formar su convicción en base a la prueba rendida en juicio.

En este caso, la prueba rendida respecto de los hechos contenidos en el requerimiento, se ha presentado ante estrados la declaración de la víctima y de los testigos de contexto como el respectivo informe de lesiones.

Acto seguido, el Tribunal deberá tener presente que la convicción no se basa en creer o no en la víctima o en el imputado, sino que es un acto racional que encuentra sustento en la prueba producida en juicio, por eso para que el Tribunal pueda llenar el requerimiento del artículo 340 del Código Procesal, es necesario que se rinda prueba que corrobore los dichos del afectado.

En este caso, a juicio del Tribunal, se ha acreditado con dicho estándar de prueba las lesiones provocadas al afectado, toda vez que se cuenta con el testimonio de ésta, la declaración de los testigos que acudieron a la posta central a prestar ayuda al afectado luego de ocurridos los hechos y que aparece ratificado por el dato de atención de urgencia”.

Cuarto: Que, como se advierte, la causal principal en que la defensa funda la nulidad impetrada guarda relación en ciertas expresiones que el sentenciador manifestó, luego de haberse comunicado el veredicto y fuera de audiencia, que quedaron consignadas en el registro de audio.



Quinto: Que, en lo referente a la garantía del debido proceso, cuya transgresión fue denunciada por el recurrente, se trata de un derecho sobre el cual existe actualmente coincidencia en que es el resultado de una larga evolución histórica e incorporado en Chile mediante el texto de la Constitución de 1980, en la que los comisionados entendieron el debido proceso como un principio que comprendía múltiples otras garantías judiciales y consideraron favorablemente la posibilidad de que su consagración cumpliera una función integradora de los derechos fundamentales. Siguiendo esa línea, se prefirió un concepto cuyas precisiones pudieran ir evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y puntualizadas por la jurisprudencia.

Con el ingreso al ordenamiento jurídico nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (publicado con fecha 29 de abril de 1989), se reunió un extenso catálogo de garantías judiciales, que aparecen enunciadas, como tales, en dichas convenciones, descritas con precisión y especificidad. La reforma procesal penal, a propósito del derecho a un debido proceso, convirtió en función central de la judicatura asegurar el respeto de los derechos fundamentales a través de diversos sistemas de control, preventivos y correctivos, inmersos en distintas normas del Código Procesal Penal. En esta realidad normativa, resulta evidente que se impone a los jueces la utilización de los principios constitucionales como estándares a los cuales debe enfrentarse ya no sólo la legislación, sino también la conducta de los agentes de la persecución penal e, incluso, de los propios jueces.

El mensaje del Código Procesal Penal sostiene que deben explicarse los principios básicos que rigen el enjuiciamiento criminal, especificando los contenidos de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos



Humanos, en que el eje del procedimiento está constituido por la garantía del juicio previo. *“Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.”* (Historia de la Ley 19.696, mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, Biblioteca del Congreso Nacional, pp. 18-19).

Acorde con lo señalado precedentemente, esta Corte ha sostenido consistentemente, en torno al debido proceso, que se trata de un derecho asegurado por la Constitución Política de la República que ordena que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de resguardos que la Carta Fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se



procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, en su caso que se respeten los procedimientos fijados en la ley con fidelidad a la Constitución y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (entre otras, SCS N°s 4.269-2019, de 25 de marzo de 2019; y, 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020).

Sexto: Que, en relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que su agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS N°s 76.689-2020, de 25 de agosto de 2020; 92.059-2020, de 8 de septiembre de 2020; y, 112.392-2020, de 3 de noviembre de 2020)

Que, en este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal.

Séptimo: Que, en base al reproche denunciado por el articulista, por más desafortunados que aparezcan los comentarios desplegados por el sentenciador



una vez concluida la audiencia, en ellos no logran evidenciarse los vicios pretendidos por la defensa. En primer lugar, dado que dichas expresiones fueron emitidas con posterioridad a comunicar la decisión de condena, luego de haber ponderado los antecedentes incorporados en la audiencia respectiva. Huelga recordar que legal y doctrinariamente, lo que se exige es que el sentenciador carezca de una opinión preconcebida sobre los hechos que deban acreditarse en la instancia procesal pertinente, pero luego de realizar la labor de ponderación es precisamente el momento en que el tribunal debe formar convicción sobre ellos.

Asimismo, los dichos del sentenciador, con posterioridad a la comunicación del veredicto, no permiten establecer por si mismos alguna de las hipótesis descritas por el legislador a propósito de las causales de impugnancia y recusación en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, máxime si los mismos se desarrollaron en una conversación privada, fuera de audiencia, oportunidad en que, por un acaso, se mantuvo el registro de audio, de forma tal que la causal en estudio no podrá prosperar.

Octavo: Que en lo que atañe al motivo subsidiario —artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal—, esta Corte ya ha señalado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo.



La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera -y no de otra-, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Noveno: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieren por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 ya citado. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, únicos o plurales, por los cuales se dieran por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Décimo: Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido como de la conducta desplegada por la imputada.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la



decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que la impugnación formulada por la defensa da cuenta de una mera discrepancia con la conclusión de condena de la acusada Yasna de Lourdes Zúñiga Barroso, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los motivos transcritos *ut supra*, por lo que la imputación relativa a una presunta falencia en la ponderación de los elementos de convicción no será admitida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 373, letra a), 376 y 385 del Código Procesal Penal, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de la sentenciada Yasna de Lourdes Zúñiga Barroso, en contra de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1.810.004.085-5, RIT 1.887-2018 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que, en conclusión, **no es nula**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuaud.

N° 26.944-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuaud D. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente, respectivamente.





En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

